

En Talca, veintidós de agosto de dos mil veintidós.

VISTO, OÍDO LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en causa RIT N°209-2021 seguida ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, mediante sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós, se condenó a don EMANUEL ANTONIO MEJIAS SALGADO, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de homicidio simple, en grado de consumado, en la persona de Nicolás Correa Lizana, hecho perpetrado el 8 de enero de 2021 en el sector de Los Niches, comuna de Curicó; sin que se otorguen penas sustitutivas por no reunir los requisitos de la Ley N°18.216, sin condena en costas.

SEGUNDO: Que, la abogada Paula Simpson Queirolo, Defensor Penal Privado, en representación de don Emanuel Antonio Mejías Salgado, interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva individualizada, invocando la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e).

TERCERO: Que, funda su recurso refiriéndose al sistema de valoración de la prueba rendida adoptado por Código Procesal Penal, este es, el de la sana crítica, citando jurisprudencia al efecto y los incisos segundo y tercero del artículo 297 del Código Procesal Penal.

Procede a profundizar en la motivación de la sentencia como garantía y control a posteriori de las razones presentadas por el juez como fundamento de su decisión, citando jurisprudencia al efecto y el artículo 1° del Código Procesal Penal.



Luego, analiza el requisito de la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, el que reproduce junto con el artículo 297 del mismo cuerpo legal, para señalar que se conmina con nulidad de la sentencia en caso de falta de fundamentación, indicando los supuestos de procedencia. Agrega que la norma en comento le impone al Tribunal el deber de indicar los medios de prueba, acto seguido valorarlos de acuerdo con los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados y, por último, señalar la conclusión de la valoración, esto es, los hechos o circunstancias que se tuvieron por probados. Agrega que en la sentencia el Tribunal *a quo* debe indicar el contenido del medio de prueba, explicando que la valoración requiere la descripción del elemento probatorio y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en él se apoya, siendo necesarios ambos momentos del razonamiento en la sentencia, por lo que de omitirse alguno, la sentencia resulta inmotivada y por tanto nula, procediendo a citar jurisprudencia en dicho sentido. Así, señala que el Tribunal debe hacerse cargo del medio de prueba indicando las razones para preferirlo o darle preeminencia, no bastando que se indique o consigne el contenido del medio de prueba, volviendo a citar jurisprudencia al efecto.

Explica que la sentencia incurre en la causal invocada, en primer lugar, por cuanto el fallo condenatorio incurre en una fundamentación aparente, ya que éste no se basa en pruebas sino que en opiniones o valoraciones, concretamente en lo que dice relación a la valoración negativa de la prueba pericial de descargo de la defensa, pero sin atender a los conocimientos científicamente afianzados en el área de la psiquiatría y de la psicología, lo que implicó que se desestimara la alegación de la Defensa, en torno a sostener que a la conducta del imputado le faltaba unos de los elementos de la culpabilidad (imputabilidad disminuida), transgrediéndose con ello además el



principio de la lógica de la razón suficiente, como también el subprincipio de corroboración, por cuanto la sentencia no contiene fundamentos que justifiquen el juicio fáctico de un modo razonablemente aceptable, careciendo de reflexiones que expliquen la supuesta corroboración, no indicándose en el fallo, además, las razones conforme al estándar legal para sustentar su decisión.

Reproduce los hechos que se dieron por acreditados en la sentencia impugnada, agregando que su defensa señaló que el acusado tiene imputabilidad disminuida para lo que ofreció y rindió prueba pericial.

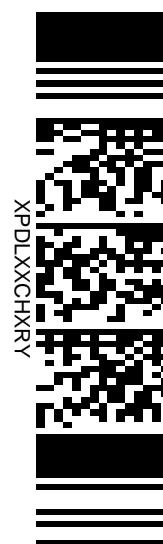
Alega que el fallo recurrido infringe gravemente el artículo 297 del Código Procesal Penal puesto que se vulneran los principios de la lógica, especialmente el de la razón suficiente y el subprincipio de corroboración, como más adelante se desarrollará y, en lo referente a los conocimientos científicamente afianzados, los que desecha sin dar mayor explicación, ni tampoco propone una causa científica diversa que se funde en algún elemento de convicción que se haya rendido en juicio, por lo que la fundamentación de la presente sentencia resulta aparente.

Hace presente que la prueba presentada por el Ministerio Público consistió en la declaración de testigos presenciales y de los funcionarios policiales que participaron en las diligencias de rigor, sin embargo, dicha prueba en nada controvirtió la alegación principal de su defensa en cuanto a descartar la alegación sobre la imputabilidad disminuida de su representado y, en especial, la innegable dinámica de los hechos, la situación de urgencia y de extrema necesidad de socorro y auxilio que padecía tanto la hija como la cónyuge de don Jorge Osorio, según lo refrendaron los mismos testigos de cargo, al referirse a la situación de violencia intrafamiliar que se venía desarrollando desde la tarde del día 8 de enero de 2020.



Sostiene que las versiones de los referidos testigos de cargo refrendaban la dinámica base de los hechos en los que se fundó la teoría de la defensa en cuanto a la propuesta de existencia de una imputabilidad disminuida en el actuar del encausado, procediendo a reproducir las declaraciones de los testigos Marco San Martín Oliva, Cesar Castillo Castillo, María Juana Osorio Correa, Jorge Osorio Acuña, Ana Correa Figueroa, José Luis Osorio Correa, Bernardo Veloso Rojas, así como las declaraciones de los testigos de la defensa Claudia Trujillo Barriga, Carolina Navarro Mejías, la del perito psicólogo Cristian Salazar Hermosilla, respecto a la pericia neuropsicológica practicada al imputado, y la del perito psiquiatra Claudio Filippi Peredo, respecto a su informe.

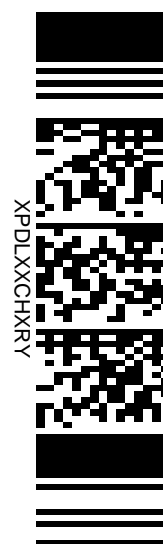
Así, señala que la defensa estima que se vulnera gravemente el principio de la lógica de razón suficiente, ya que el fallo de marras incurre en una fundamentación aparente, desde que valora negativamente la prueba pericial de la defensa, en cuanto a metodología empleada y estándares de elaboración de los mismos, basándose únicamente en opiniones o valoraciones que no tienen correlato con ningún medio de prueba rendido en juicio, alegando que el Tribunal *a quo* arriba a una decisión diametralmente distinta a las conclusiones expuestas por los dos profesionales del área de la salud mental, que indica que son expertos en la materia, ya que dando razón de sus respectivos peritajes, expusieron la conclusión a la que ambos arribaron en éstos, vale decir, que la voluntad de su defendido al momento de los hechos se encontraba comprometida, absolutamente alterada, además de que el imputado presentaba un deterioro cognitivo por síndrome disejecutivo prefrontal, en atención a tres áreas con disfunción: el control inhibitorio, la memoria inmediata y la flexibilidad cognitiva; y además de presentar un consumo dependiente de alcohol y trastorno de control de impulsos.



Considera que existirían elementos clínicos presentes en el imputado que pudiesen fundamentar una imputabilidad disminuida, refiriéndose a la metodología y antecedentes en que se apoyo el perito psiquiatra Claudio Filippi Peredo, indicando que estos fueron: entrevista clínica vía teleconferencia, se realiza examen mental, se revisa evaluación neuropsicológica por el perito Ps. Christian Salazar Hermosilla, se revisan fichas clínicas del imputado del Hospital de Curicó y del CESFAM Los Niches, Se trabaja como referencia en base a la Resolución que aprueba actualización del texto sobre guía normativa técnica pericial de salud mental en las áreas de psiquiatría, psicología y trabajo social médico legal, se revisa expediente judicial, con lo concluye que el evaluado presentaría dos condiciones psiquiátricas según criterios CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud, que serían dependencia del alcohol y el trastorno del control de los impulsos, cuadros que serían plenamente concordantes con la evaluación neuropsicológica realizada por el perito Ps. Christian Salazar Hermosilla, quien plantea la existencia de un síndrome disejecutivo prefrontal en su informe del 25 de septiembre del 2021.

Refiere que estos cuadros habrían influido en la psicogénesis delictiva al alterar la capacidad de comprender lo ilícito como obrar conforme a esa comprensión, en cuanto se habrían alterado al menos dos factores de la imputabilidad como son la normalidad de las reacciones emocionales y afectivas, así como la ausencia de impulsos patológicos, los cuales claramente se encuentran menoscabados en esta situación.

Refrenda que, lo anterior permite explicar la conducta del imputado en los hechos investigados, destacando que el imputado ya había consultado el año 2019 en el Servicio Público de Salud por las consecuencias negativas de esta conducta, no recibiendo la debida derivación a psiquiatra que

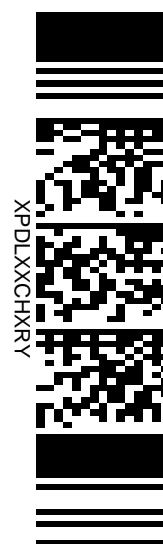


posiblemente hubiera permitido que el imputado recibiera un tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico adecuado para ambas condiciones.

Reitera que se concluyó que el imputado presentaría al menos dos condiciones clínicas según criterios CIE 11 de la OMS: dependencia del alcohol y trastorno del control de los impulsos, y que estas condiciones habrían modificado la imputabilidad al alterar dos condiciones requeridas de ella como son la normalidad de las reacciones emocionales y afectivas, y la ausencia de impulsos patológicos, por lo mismo, se considera que el imputado está afecto a lo dispuesto en el artículo 11 N°1 del Código Penal, lo que debe ser determinado en definitiva por el Tribunal.

Indica que la incógnita que surge sobre el particular es ¿por qué su representado, que no conocía a la víctima, según lo depusieron todos los testigos de cargo, inclusive aquellos que tienen la calidad de testigos presenciales -los que indicaron que la víctima e imputado nunca cruzaron palabras, que no tenían rencillas ni problemas anteriores-, terminó agrediendo a la víctima? ¿Por qué ocurrió el homicidio? Ante lo que señala que todo tiene una causa o un motivo, hasta las mínimas cosas, que a veces no se encuentra y se tiene que indagar más, pero lo cierto es que siempre hay algo que justifica el por qué ocurre algo. En este caso, tanto la fiscalía como el querellante les preguntaron a todos los testigos, en reiteradas ocasiones, si existía algo previo entre el imputado y la víctima, si tenían problemas previos, si cruzaron palabra, si se dijeron algo, y todos están contestes en decir nada, no se conocían, no se hablaron, el imputado no dijo nada y la víctima no le dijo nada a él.

Señala que fueron contestes los testigos de la defensa en indicar que el imputado tenía problemas de consumo problemático del alcohol, que dicho problema de alcohol le causaba ira, que él busco ayuda, pero no lo ayudaron,



etc., todo lo que permite corroboración directa a la conclusión de los peritos, pues en el lugar de los hechos describe al sujeto conocido como el "huara", quien, según lo relatado por el papá de la polola de la víctima, don Juan Osorio, este se encontraba compartiendo y bebiendo toda la tarde en la casa de Mejías Salgado cuando recibe el llamado de auxilio de su señora para que fuera a calmar a la víctima, tras este llamado telefónico, los gritos de auxilio escuchados por el imputado, sumado su condición especial, a juicio de los peritos, ese día recibe un estímulo que lo hace reaccionar curiosamente, un estímulo ajeno, que no era parte de la discusión o el problema de VIF y frente a este estímulo de manera bastante poco racional responde agrediendo a esta persona y con posterioridad no tiene referencias en su memoria de lo que sucedió, ese obrar es bastante emocional, no está bajo control de impulsos y además está bajo consumo de alcohol, ya que no quiso hacerlo. Refiere que los propios testigos de cargo indicaron que no había motivo para que lo hiciera, que lo anterior, medio sin provocación alguna, no cruzaron palabras, es más, el hermano de la polola de la víctima indica que la víctima gritó que lo apuñalaron y ve al imputado al lado y el mismo "Huara" le dice quién es, es decir, el imputado no tenía en ese momento ni siquiera conciencia de que había hecho y mucho menos a quién había agredido.

Alega que, frente a aquellas aseveraciones, el Tribunal rechaza la imputabilidad disminuida indicando que no basta la mera entrevista clínica con el imputado que dicha entrevista sólo duró 45 minutos por lo que malamente podrían arribar a dicha conclusión en base al poco tiempo que, a su juicio le dedicaron a las mismas, pero esa conclusión es errada, toda vez que ambos peritos refirieron no solo a la entrevista clínica, fundamental en esta área científica, sino que también se basaron en el examen de la documentación que tuvieron a la vista, en la ficha clínica del imputado, incluso, agrega que el



Tribunal refiere que la concurrencia de la entrevista no es suficiente, pero sin indicar las razones científicas concretas para llegar a esa conclusión, ni mucho menos especificar cuáles a su juicio son las otras actividades propias que un psicólogo y/o un psiquiatra, debieron practicar, circunstancia preocupante, primero porque el Tribunal carece de conocimientos científicos en la materia, y segundo porque tampoco hubo prueba en sentido contrario que hubiere podido desacreditar dichos peritajes o que sugiriere que estos adolecieron de algún vicio, error o incorrección científica.

Reitera que la Fiscalía no controvertió, ni desacreditó la expertiz de los científicos, no cuestionó la validez de los peritajes de manera seria y conteste con la metodología que, según el ente persecutor, debían de acogerse los peritos; es más, los peritos dieron razón de sus dichos, indicando al efecto el Perito Psiquiatra, don CLAUDIO FILIPPI PEREDO, que su Informe se elaboró de acuerdo a las normativas vigentes en base a la Resolución 8083 que aprueba actualización del texto sobre guía normativa técnica pericial de salud mental en las áreas de psiquiatría, psicología y trabajo social médico legal, a su turno, el perito psicólogo don Christian Salazar Hermosilla, refirió que su peritaje lo elaboró de acuerdo a la normativa vigente de protocolo de trabajo en pandemia por el virus SARS CoV-2, que provoca la enfermedad del COVID-19, y que está acorde al instructivo del Ministerio de Salud en cuanto al ejercicio profesional de los psicólogos -Modificación Resolución Exenta N°277/201, del Ministerio de Salud, Resolución 204, 24 marzo 2020. 2 Incorpórese: a continuación de la letra C, del numeral 15,2 lo siguiente: *"Durante períodos de vigencia de Alerta Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud por el COVID-19, las prestaciones de psicología podrán ser realizadas en forma remota manteniendo registros de estas prestaciones, en los mismos términos que una atención presencial, a través de tecnologías de*



información y telecomunicaciones entre un paciente y un profesional psicólogo que se encuentran en lugares geográficos distintos y que pueden actuar entre sí en tiempo real sincrónica-.

A mayor abundamiento, señala que revisado ambos protocolos, en ninguno de ellos figura el número de sesiones o entrevistas que debe de sostener el Profesional con el evaluado, para que dichos informes tengan validez; asimismo, refieren que en ambos casos, los dos profesionales deben de tener en consideración tanto los elementos subjetivos entregados en las entrevistas (relato), como también deben de cotejar todos los antecedentes objetivos que permitan nutrir los aspectos subjetivos del mismo, cuestión que ambos peritos cumplieron, ya que tuvieron a la vista no sólo la carpeta investigativa, sino que además, la Ficha Clínica del acusado, sin perjuicio de que el Perito Psiquiatra solicitó (ex antes) a través de la defensa un Informe Neuropsicológico preliminar para poder evaluar a Mejías Salgado.

Alega que lo anterior no fue ponderado por la Fiscalía ni en las conclusiones que fueron expuestas en estrados, y simplemente se limitó a señalar en el alegato de clausura que no coincidía con ellos, y que su metodología no era la idónea, sin expresar cual o cuales serían los supuestos idóneos para validar la pericia, arguyendo que esa es la misma actitud de los sentenciadores, ya que, de la sola lectura de la sentencia, nos encontramos con una apreciación de no compartir las conclusiones de los peritos, pero nada desarrollan sobre cuál es la razón de aquello, cuáles son los fundamentos científicos al respecto, o si hubo alguna infracción a la Lex Artis que incidiera sobre la decisión del Tribunal, señalando que hay que considerar al efecto, que los jueces al igual que el resto de los intervinientes, son legos respecto a esta materia, carecen de estudios formales en psicología y psiquiatría.



Reproduce parte de la sentencia recurrida para señalar que la afirmación no es compartida por la defensa, toda vez que el Tribunal formula exigencias al perito en orden a como se debe llevar a efecto su trabajo, ex post, pero esa circunstancia no fue exigida durante la rendición del testimonio en estrados, ya que ni Ministerio Público, ni el propio Tribunal, hizo preguntas sobre ese punto, y por último tampoco, la sentencia establece de qué forma se llegó a esa conclusión, si es que tuvo a la vista literatura científica forense sobre el punto o que hubiere prueba metapericial para desacreditar los dichos de los peritos de la defensa, como la conclusión sobre este cuestionamiento es negativa, es decir, el Tribunal no tuvo acceso a información relativa al punto, además carece de conocimientos científicos formales, no debió atreverse a exigir actuaciones médicas sobre un punto que desconoce, por el contrario, si accedió a dicha información científica, debió estar incorporada en su sentencia, debido ser explicitada clara profusamente, como en el caso particular sabemos que la sentencia no la desarrolla ni menciona, produciéndose con ello una infracción a los conocimientos científicamente afianzados que redundaría en una infracción al principio de razón suficiente.

Alega que este hecho, evidentemente deja en la más profunda indefensión a la defensa, e impediría considerar siempre y en cualquier causa, esta minorante respecto de las personas con un trastorno disfuncional frontal o bien, que tengan su imputabilidad comprometida parcialmente. Por esta razón, y en beneficio de los principios antes señalados, la contundente prueba de la defensa no controvertida, ni prueba en contrario que pudiere restarle credibilidad o mérito científico en estrados, se debió sancionar la aplicación del artículo 11 N°1 del Código Penal, en relación con el artículo 10 N°1 y 73 del mismo cuerpo legal, y en consecuencia la rebaja en 1, 2 o 3 grados del



mínimo, es decir imponer una pena de 3 años y 1 día a 5 años de presidio menor en su grado máximo.

Explica el perjuicio o gravamen, indicando que, desde este punto de vista, dado el mérito de los antecedentes entregados al Tribunal no cabe duda que de no haber incurrido en la infracción antes señalada, se hubiese valorado la prueba correctamente conforme al artículo 297 del Código Procesal Penal, esto es, de acuerdo a los principios de la lógica y principalmente los conocimientos científicamente afianzados en el área de la psiquiatría y de la psicología, y, por ende, el reproche de su representado debió de ser inferior en uno, dos o tres grados, la que permitía acceder a una pena en medio libre, dada la irreprochable conducta anterior que incluso lo beneficiaba.

Por todo lo expuesto, solicita que esta Corte acoja el presente recurso por la causal única de nulidad invocada, a fin de que se anule el juicio oral y la sentencia, debiendo retrotraerse la causa al estado de realizar una nueva audiencia de juicio oral, por un Tribunal no inhabilitado, lo anterior en base a lo expuesto en el cuerpo de su escrito, debiendo emitirse las demás declaraciones que se estimen del caso, conforme al mérito de autos.

CUARTO: Que, con respecto a la causal invocada por el recurrente, esta es la establecida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, es menester señalar que el artículo 342 del mismo cuerpo legal, precisando el contenido de las sentencias, señala en su literal c) que la sentencia definitiva contendrá *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probado, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297;”*.



A su vez, el artículo 297 del texto legal en comento señala que *“Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”* y agrega en su inciso final que *“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”*.

Así, la motivación de la sentencia debe respetar, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y los principios de la lógica, dentro de estos últimos se encuentra el principio de la razón suficiente, para lo cual el razonamiento seguido en ella debe constituirse mediante inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en su virtud se vayan determinando, satisfaciendo así las exigencias en el sentido de ser concordante, verdadera y suficiente. (Excma. Corte Suprema Rol N°3210-2011).

QUINTO: Que, además, se debe recordar que la convicción exigida por el artículo 340 del Código Procesal Penal, esto es, más allá de toda duda razonable, exige una convicción o un grado de certeza exento de dudas razonables y que permita a los sentenciadores confiar y actuar de acuerdo con ella sin dudar. Así, es entendido que esta convicción se forma sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral.

SEXTO: Que, la parte recurrente estima que se ha vulnerado el principio de la lógica de la razón suficiente y los conocimientos científicos afianzados, por cuanto habría una fundamentación aparente respecto a la



valoración negativa de los informes periciales ofrecido e incorporado por la defensa para acreditar la existencia de una imputabilidad disminuida.

SÉPTIMO: Que, del análisis de la sentencia recurrida, se avizora que, en el considerando décimo tercero, ésta se hace cargo pormenorizadamente de las razones por las que rechaza el reconocimiento de la atenuante contemplada en el artículo 11 N°1 del Código Penal, en relación con el artículo 10 N°1 del mismo cuerpo normativo, indicando cuáles fueron los motivos se tuvieron a la vista para desestimar las pericias ofrecidas y aportadas por la defensa.

En específico, respecto a la metodología utilizada y a las fichas clínicas utilizadas, se expresa que: *“en primer término, ambos peritos evidenciaron importantes deficiencias en su metodología, pues tal y cómo quedó acreditado, toda la información recabada en relación a la historia vital del evaluado fue obtenida prácticamente solo de los dichos del periciado, no siendo corroborada con ningún otro antecedente objetivo, así tenemos, por ejemplo, en relación a su historial de supuesto alcoholismo y faltas de memoria, que en el juicio escuchamos los testimonios de Claudia Trujillo Barriga y Carolina Navarro Mejías, quienes fueron contestes en que conocían hace años al imputado, a quien describieron como una persona trabajadora, muy tranquila, que había tenido pareja y mantenía una hija, que no tenía problemas con nadie, etc., siendo ello corroborado por el propio testimonio de Mejías cuando señaló que ha mantenido trabajos estables, incluso estuvo viviendo más de tres años en la ciudad de Santiago, donde se desempeñó sin problemas, sin mencionar ellas o éste que el alcohol haya sido un impedimento para desarrollar una vida normal; testimonios que son contrarios a lo que concluyó el siquiatra en relación a su embriaguez. Más aun, el siquiatra Filippi señaló que se trataba de una persona que era adicta al alcohol, señalando que ser adicto es ser esclavo y esa condición es no*



voluntaria en este tipo de consumo, siendo su historia que este consumo desde hace bastante tiempo, que consume diariamente y sin espacios en blanco, que llega hasta la embriaguez, pero ello no se condice con las versiones de los testigos de la defensa así como tampoco del imputado, es más, no se acompañó ningún testimonio o evidencia que el alcohol o sus faltas de memoria hayan tenido un efecto negativo en su actuar. Siendo del todo insuficiente la mención, como fuente de información, de una ficha clínica aludida por los peritos, puesto que ello también es una información que tiene como fuente los dichos del imputado, y que no logró ser verificada por otros medios de prueba de modo tal que permita al tribunal cotejar y valorar de modo objetivo la información entregada, con mayor razón si esa ficha no se aportó para ser examinada como prueba. Si bien ambas testigos de la defensa mencionaron problemas con el alcohol, no fueron precisas en señalar de qué forma o en qué casos se producían”.

Es más, el Tribunal *a quo* sostiene que el informe no se condice con la demás prueba rendida en juicio, señalando en el mismo considerando que: “*en relación al excesivo consumo de alcohol que se menciona por los peritos, que de acuerdo a sus versiones era muy alto, diario y que llevaba al acusado al extremo de tener lagunas, extraña al tribunal la circunstancia que durante todo el periodo que ha estado privado de libertad no haya tenido síndrome de abstinencia, pues ante las consultas en relación a si habían tomado conocimiento los peritos que haya requerido atención médica o psicológica por ello, señalaron que no tenían ningún conocimiento de ello, así como tampoco el evaluado hizo mención a sufrir algún problema de este tipo. Es más, el tribunal estima que el referido excesivo consumo de alcohol, tampoco fue probado, pues tan solo se deriva de los propios dichos del acusado, sin*



que se hubiese acompañado ningún antecedente objetivo que permita corroborarlo”.

A mayor abundamiento, el Tribunal de instancia señala varias debilidades de los peritajes, entre ellas: el tiempo que se empleó para la realización de estas y la cantidad de test que se supone que se le practicaron, que no se incluyó en ellos un relato de los hechos por parte del evaluado, cuestión esencial para determinar si al momento de cometerlo se encontraba afectada su culpabilidad, sobre todo si los estudios se hicieron meses después de los hechos, aduciendo que no hay antecedentes que para determinar la condición del imputado en ese momento y no meses después. Agrega que la dinámica acreditada de los hechos no se condice con la incapacidad de determinarse que se señala en las pericias, no habiéndose acreditado con la prueba rendida que se encontraba en estado de embriaguez, que sería lo que habría provocado el “black out” que alega la defensa, que los funcionarios de Carabineros encargados del procedimiento no mencionaron que hubieran indicios de estado de ebriedad, sino que, al contrario, el imputado habría manifestado libre y espontáneamente que había sido el autor de los hechos y que estaba arrepentido, señalando que estaba tranquilo y no alterado, no habiéndose acreditado que se encontrara en un estado de alteración mental que le impidiera tomar conciencia de sus actos. Aduce, también el fallo, que uno de los peritos expresó nuevas conclusiones en su declaración, las que no estaban en su informe, y que señaló que desconocía los hechos que se imputaban, pues no le consultó al evaluado por los motivos que lo mantenían en el centro de cumplimiento penitenciario. Finaliza señalando que, además, el consumo excesivo de alcohol no constituye base para la imputabilidad disminuida pues el imputado se colocó voluntariamente en dicho estado.



OCTAVO: Que, de esta forma, la sentencia explica en forma abundante las razones que llevaron a desestimar la prueba pericial de la defensa, concluyendo que la imputabilidad disminuida no fue acreditada y que las máximas de la experiencia señalan que muchas veces las personas actúan sin un motivo o razón determinada, por un arrebató del momento y no por ello son inimputables. El Tribunal de instancia valoró la prueba pericial relacionándola con la demás prueba incorporada al proceso y dando las razones que lo llevaron a adoptar la conclusión referida.

En conformidad con lo anterior, a juicio de estos sentenciadores la sentencia impugnada valora la prueba de forma correcta, sin apreciar la vulneración al principio de la razón suficiente o de los conocimientos científicos afianzados, pues las conclusiones científicas contenidas en los informes periciales se obtienen sobre determinados hechos, los que deben ser acreditados e incorporados al proceso, de forma que estos se condigan con la realidad de los hechos acreditados.

A mayor abundamiento, estos sentenciadores no han detectado las vulneraciones alegadas ni cualquier otra a las reglas de la sana crítica, por lo que el fallo ha sido debidamente fundado y explicado permitiendo reproducir el razonamiento del sentenciador.

NOVENO: Que, es necesario recordar que el recurso de nulidad es un recurso de derecho estricto y, por lo tanto, limitado exclusivamente al examen de los aspectos jurídicos de la sentencia, sin que este tribunal de alzada tenga competencia para revisar los hechos de la causa ya establecidos en la sentencia impugnada, pues esta es una atribución exclusiva de los jueces del fondo, así, la Corte no puede cambiar los hechos inamoviblemente asentados por los jueces del tribunal a quo, a menos que ésta se ha realizado infringiendo las reglas de la sana crítica, sin embargo, estos sentenciadores consideran que la



valoración contenida en la sentencia se ajusta a la legalidad, siendo un hecho completamente distinto que el recurrente no comparta la valoración y conclusiones adoptadas por los sentenciadores, lo que no es parte de la presente causal de nulidad.

DÉCIMO: Que, por tanto, no habiéndose infringido en la sentencia recurrida las reglas de valoración de la prueba estatuidas por el artículo 297 del Código Procesal Penal y cumpliendo ésta, consecuentemente, con todos los requisitos exigidos por el artículo 342 del mismo cuerpo legal, corresponde desestimar la causal de nulidad alegada por la defensa, por lo que el presente recurso de nulidad debe ser rechazado.

Conforme a lo razonado, disposiciones legales citadas y visto, además, lo prescrito en los artículos 373 y 374 del Código Procesal Penal; **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por la abogada Paula Simpson Queirolo, en representación del sentenciado EMANUEL ANTONIO MEJÍAS SALGADO, de manera que la sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó no es nula.

Regístrese, y devuélvase.

Rol N°788-2022 Penal.

Redacción del Abogado Integrante **Ruperto Pinochet Olave.**

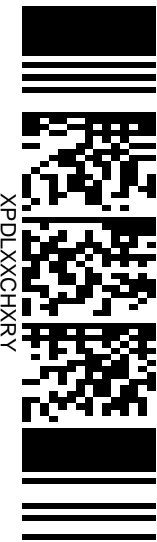




XPDLXCHXRY

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Talca integrada por los Ministros (as) Moises Olivero Muñoz C., Carlos Carrillo G. y Abogado Integrante Ruperto A Pinochet O. Talca, veintidós de agosto de dos mil veintidós.

En Talca, a veintidós de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>